



AMÉRICA LATINA DE CARA A LA COP26

Fermín Koop*

26 de octubre de 2021

Resumen

De forma previa a la COP26, el gobierno de Argentina convocó el 8 de septiembre al Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas, un evento virtual de un día de duración para debatir sobre el compromiso de la región para aumentar la acción climática y unificar posiciones. En el evento, los gobiernos coincidieron en la necesidad de contar con un mayor financiamiento de los países desarrollados para reducir las emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático. Del mismo modo, pidieron a sus acreedores una reducción de sus deudas soberanas, las cuales se vieron incrementadas en el marco de la pandemia de la COVID-19, a cambio de implementar metas climáticas más ambiciosas.

Introducción

Con vistas a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebrará en Reino Unido durante las dos primeras semanas de noviembre de 2021 (COP26), el 8 de septiembre el gobierno de Argentina convocó al Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas para debatir sobre el compromiso de la región para reforzar la acción climática y unificar posiciones.

El evento contó con la participación de representantes de Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Barbados, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Estados Unidos y Reino Unido. Brasil y México, dos de los grandes emisores de la región, no formaron parte del evento, ni tampoco Uruguay, país vecino de Argentina.

“No hay una crisis ecológica ajena a la crisis social y ajena a la necesidad de replantear los pilares de la arquitectura financiera internacional. Necesitamos financiamiento y nuevas reglas para que la transición sea justa”, dijo en la inauguración del encuentro el presidente argentino, Alberto Fernández, solicitando incentivos para la acción climática.

El cambio climático juega un papel significativo en las actuales conversaciones nacionales de América Latina y el Caribe. El tema está asimismo en el centro de la nueva asamblea constituyente de Chile, las políticas de Brasil sobre el Amazonas, los reclamos de la ciudadanía por mejorar la calidad del aire y los esfuerzos por desarrollar energías renovables.

América Latina y el Caribe está en una posición particularmente asimétrica frente al cambio climático. Su contribución a las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) es bastante limitada y,

* Periodista argentino especializado en medio ambiente y cambio climático. Licenciado en Periodismo, Especialista en Cambio Climático y Magister en Ambiente y Desarrollo.



sin embargo, alberga zonas altamente vulnerables a los efectos del cambio climático (Cárdenas *et al.*, 2021).

En conjunto, la energía, la agricultura y los cambios del uso de la tierra, incluyendo la deforestación, representan alrededor del 80% de las emisiones de GEI de la región. Y el transporte es la fuente de emisiones de GEI que más crecimiento está registrando en América Latina (Bárcena *et al.*, 2020)

La región, además, se encuentra particularmente expuesta a los eventos climáticos extremos, que se están volviendo cada vez más frecuentes. Entre 1950 y 2016, el Caribe sufrió 324 desastres inducidos por el clima, que se llevaron las vidas de más de 250.000 personas y dieron lugar a pérdidas equivalentes a 22.000 millones de dólares (Cárdenas *et al.*, 2021).

El objetivo de este ensayo es analizar lo tratado en el Diálogo de Alto Nivel a la luz de un contexto más amplio. El texto está dividido en tres secciones: en la primera se hablará del evento y de la fragmentación de América Latina; en la segunda se ahondará en los desafíos climáticos de la región y, por último, se abordará la cuestión de la descarbonización.

La fragmentación de América Latina

El Diálogo de Alto Nivel buscó promover los acuerdos para enfatizar la urgencia de la acción climática en América Latina de cara a la COP26, fomentar su ambición, impulsar el diseño de mecanismos innovadores de medios de implementación, además de incentivar la cooperación para la adaptación y resiliencia de la región.

La cumbre reunió a expertos económicos y representantes de organismos multilaterales y de gobiernos, quienes expusieron sus propuestas, criterios y compromisos en seis paneles a lo largo de un día, en los que se abordaron desde la necesidad de tomar acciones en conjunto hasta la importancia de involucrar al sector privado.

El primer panel consistió en un debate político de alto nivel, con la participación de presidentes y ministros, quienes resaltaron la necesidad de incrementar el financiamiento para la adaptación ante los retos del cambio climático y la mitigación de sus efectos. Los mandatarios sostuvieron que América Latina no generó la crisis climática y, por tanto, debería ser apoyada en sus esfuerzos para reducir sus emisiones.

“Este evento representa el espíritu multilateral que necesitamos. Tenemos que actuar conjuntamente para superar el estancamiento. Muchos países de la región están mostrando un liderazgo para reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático”, afirmó Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas.

Del mismo modo, Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, afirmó:

Tenemos que endeudarnos para enfrentar las consecuencias del cambio climático, que aumenta cada vez más. Estamos en un ciclo perverso y a ello ahora se suma la pandemia. El cambio climático tiene emisores importantes y ellos tienen que poner su parte. [Y agregó]: Vemos inundaciones, incendios forestales, se derriten los glaciares, hay pérdida de la biodiversidad... Irónicamente este año el gasto militar del mundo volvió a crecer. ¿Dónde está la prioridad del mundo? Nos estamos armando para un conflicto armado cuando nuestra princi-



pal amenaza es la supervivencia de nuestra casa común.

No obstante, pese a que sus países son prácticamente los de mayor afinidad entre los Estados miembros de Naciones Unidas, América Latina no tiene voz propia en el marco de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. Ello obedece a una fragmentación en numerosos grupos de negociación, algo que puede observarse en cada Conferencia de las Partes (COP) de Naciones Unidas.

Entre ellos, se destacan el Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), que representa a los 33 países de la región; el Grupo de los 77 y China, que representa a los países en vías de desarrollo; el ALBA, formado originalmente por Cuba y Venezuela; la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), y el G20, del que forman parte Argentina, México y Brasil (Tudela, 2014).

En este marco, el Diálogo de Alto Nivel buscó lograr un mayor nivel de concertación de la región, especialmente de cara a la COP26. A pesar de la ausencia de países relevantes en materia de emisiones, como Brasil y México, se logró una unidad entre los participantes a partir del reclamo de obtener mayor financiamiento de los países desarrollados y la condena de deudas soberanas.

En el marco del Acuerdo de París, los países desarrollados se comprometieron a aportar 100.000 millones de dólares por año para 2020, con el objetivo de asistir a los países en vías de desarrollo en materia de adaptación y mitigación ante el cambio

climático. Sin embargo, todo indica que la meta se incumplirá. Los gobiernos donantes contribuyeron con 79.600 millones en 2019, el año más reciente para el que hay datos disponibles, con la mayor parte del dinero concentrado en mitigación (OCDE, 2021).

Se estima que el cambio climático podría costarle a América Latina entre el 1,5% y el 5% de su PIB anual. La agricultura sería uno de los sectores más afectados, con una serie de impactos que van desde el aumento de la erosión al traslado de las zonas de cultivo. Un problema adicional radica en la disminución de los glaciares andinos que podría afectar la disponibilidad de agua potable (CEPAL, 2014)

En este sentido, especialistas e investigadores coinciden que la región se encuentra atrasada en la provisión y diversificación de las fuentes de capital, y no cuenta con instrumentos financieros adecuados, por ejemplo, líneas de crédito, refinanciación y garantías. Asimismo, los mercados financieros locales carecen de la experiencia, el conocimiento y las redes para formular opciones de financiamiento climático.

Ante dichas barreras, las instituciones de financiación climática y los bancos multilaterales han desempeñado un papel particularmente importante en la financiación de proyectos en América Latina. En años recientes, el rol de estas instituciones se ha redefinido, catalizando inversiones privadas más que aportando fondos directos.

Los fondos climáticos para América Latina provienen actualmente de cuatro gran-



des fuentes. La principal es el Fondo de Tecnología Limpia (CTF, por sus siglas en inglés), administrado por el Banco Mundial. Este ya ha aprobado 31 proyectos por valor de 930 millones de dólares. En segundo lugar, se encuentra el Fondo Verde para el Clima (FVC), con un monto equivalente al CTF pero destinado a 20 proyectos. El Fondo Amazonia, que ha asignado 720 millones de dólares a 103 proyectos dentro de Brasil, ocupa el tercer lugar. El 65% del financiamiento total para la región proviene de estos tres fondos. Complementando a los fondos multilaterales, también se recibe financiamiento bilateral para el clima, que incluye fondos de Alemania y Reino Unido, activos en la región.

La distribución del financiamiento está concentrada en las economías más grandes como Brasil (1.254 millones de dólares) y México (685 millones de dólares), países que reciben conjuntamente el 49% de todo el financiamiento. Chile, Colombia y Argentina son otros de los principales beneficiarios. Hasta 2020, el 81% del financiamiento se ha destinado a actividades de mitigación (Watson, 2020).

Teniendo en cuenta la persistencia de la desigualdad de los ingresos y la pobreza en América Latina, incluso en los países con economías más desarrolladas, los mandatarios resaltaron en el Diálogo de Alto Nivel la necesidad de dar mayor importancia a la adaptación y equilibrar las brechas con la mitigación. “Estamos decepcionados”, dijo la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, tras narrar las consecuencias del huracán Elba sobre esta isla caribeña el pasado julio.

Los desafíos para América Latina

Uno de los ejes centrales del Diálogo de Alto Nivel fue la crisis económica y cómo esta ha imposibilitado que los países de América Latina avancen en materia de acción climática. En el panel “Mecanismos innovadores para medios de implementación”, representantes de instituciones financieras y organismos multilaterales resaltaron la necesidad de aliviar las deudas soberanas y buscar nuevos mecanismos de financiamiento climático.

El PIB de América Latina cayó un 7,7% en 2020 y no volverá a los niveles anteriores a la pandemia hasta 2024, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Como en todo el mundo, se ha instado a los países de la región a aprovechar la crisis como una oportunidad para iniciar una recuperación sostenible, especialmente considerando sus vastos pero amenazados recursos naturales.

En la Unión Europea se ha presentado el Pacto Verde Europeo (EGD, por sus siglas en inglés), con el que espera transformar la economía del bloque y abordar la triple crisis de biodiversidad, clima y contaminación. Para ello, se plantean acciones en las áreas de energía, industria, edificación, movilidad, y agricultura y alimentación (Sanahuja, 2021). Del mismo modo, Estados Unidos introdujo un plan de recuperación para su economía con un foco especial en las energías renovables, tal y como también ha sido el caso de China.

Durante el evento, José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos de la CEPAL,



destacó que los recursos que se han invertido en América Latina han estado hasta ahora poco alineados con la emergencia climática, mencionando estadísticas desarrolladas por la CEPAL. En 2020, sostuvo Samaniego, el “gasto marrón”, es decir, la inversión alta en emisiones, fue superior en América Latina al “gasto verde” en una proporción de cuatro a uno: se invirtieron 1.600 millones de dólares en proyectos verdes, mientras que, para el “gasto marrón” se destinaron 7.400 millones. “Estamos gastando el 3% de los recursos etiquetados para la recuperación, mientras que el resto del mundo ha gastado el 21%”, lamentó Samaniego.

Dicho esto, es cierto que un grupo de países de América Latina están desarrollando programas específicos para una recuperación verde en el marco de la pandemia. Tal es el caso de Argentina, cuyo “Plan de Desarrollo Productivo Verde” presentado en 2021 incorpora criterios de sostenibilidad en la industria argentina; o de Chile con su programa “Paso a paso Chile se recupera” de 2020, el cual destina el 30% de los fondos a proyectos que contribuyan a la mitigación y adaptación ante el cambio climático.

Con el fin de lograr mayor financiamiento verde, Samaniego se comprometió a crear un Fondo de Resiliencia para el Caribe en el marco de la CEPAL. Con él coincidió Mari E. Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial, quien también participó del evento. Pangestu resaltó que, actualmente, el organismo destina un 35% de sus fondos a la adaptación ante el cambio climático y afirmó que “es momento de

no solo invertir en una economía verde, sino de pasar a una economía verde”.

Por su parte, Kristina Kotial, directora adjunta del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló que esta organización ha activado varios mecanismos para apoyar a los países en vías de desarrollo. Ello incluye el asesoramiento en políticas ambientales y la posibilidad de implementar un fondo que ayudará a los países vulnerables a implementar reformas para abordar los desafíos del clima.

A ello se refirió también Antonio Guterres, quien pidió a donantes y bancos internacionales asignar el 50% de sus fondos en apoyo a la adaptación climática. “La arquitectura internacional de la financiación para el desarrollo para los países debe ofrecer opciones que vinculen a la acción climática con la sostenibilidad de las deudas”, agregó, en línea con lo expresado por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la apertura de la conferencia.

Los discursos de los presidentes y ministros de América Latina, que tuvieron un tono más político que técnico, también detallaron los planes climáticos desarrollados por la región, conocidos como Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). Desde las organizaciones ambientales, no obstante, se esperaban anuncios de compromisos más ambiciosos que finalmente no ocurrieron.

El Acuerdo de París, firmado en 2015, tiene como objetivo limitar el calenta-



miento global para que no supere los 2°C. Para lograrlo, las emisiones de GEI deben alcanzar su pico lo antes posible y luego caer a cero en 2050. Hoy, la gran mayoría de los planes climáticos de la región no están en línea con estas metas. El mundo se encamina a un incremento de la temperatura de 2,7°C para fin de siglo, de acuerdo con los análisis de los planes climáticos hasta ahora presentados a nivel global (CMNUCC, 2021).

El presidente de Colombia, Iván Duque, reafirmó su compromiso de reducir un 51% las emisiones del país, eje central de su nueva NDC presentada en 2020. Además, aludió a impulsar la electromovilidad y las energías renovables. Mientras, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, también reafirmó su NDC actualizada en 2021, y resaltó el compromiso para potenciar las energías renovables y erradicar la deforestación ilegal.

Duque y Fernández demandaron también soluciones financieras a la doble crisis climática y de deudas soberanas, como establecer un sistema de condonación de deuda por objetivos medioambientales o incluir la sostenibilidad en los criterios de producción. Desarrollar dichos mecanismos permitiría a los países comprometerse con metas de reducción de emisiones más ambiciosas, aseguraron ambos mandatarios.

La reducción de deudas soberanas suele estar condicionada al compromiso del gobierno deudor de invertir en parques de energía renovable y áreas protegidas, o reunir los ahorros generados en un fondo fiduciario local que financie proyectos de preservación. Hasta ahora, la forma más

habitual de canjes de deuda por naturaleza han sido los canjes bilaterales, pero son de escala menor a lo que se discute actualmente.

En el marco de la pandemia, con un mayor endeudamiento de los países de América Latina, se han contemplado nuevos mecanismos de mayor escala, desde bonos con metas de biodiversidad y climáticas, a instrumentos de reducción de deuda que varios países mantienen con organismos como el FMI y el Banco Mundial, especialmente en el caso de Argentina y Ecuador. Los dos organismos se comprometieron a presentar un instrumento de “canje de deuda verde” en la COP26.

La descarbonización de América Latina

Hasta la fecha, Costa Rica sigue siendo el único país de América Latina que ha presentado oficialmente ante Naciones Unidas una estrategia de descarbonización a largo plazo para 2050, y que ha comenzado a aplicar. De acuerdo con análisis preliminares, el plan implicaría 41.000 millones en beneficios netos en las próximas tres décadas gracias a ahorros en energía y mejoras en servicios ecosistémicos (Groves *et al.*, 2020)

Otros países ya están trabajando en sus estrategias de largo plazo y, como se señaló en el Diálogo de Alto Nivel, podrían presentar sus respectivos planes en la COP26. Tal es el caso de Chile y Argentina, que ya han presentado sus NDC actualizadas en 2020 y 2021, y en estos momentos están manteniendo discusiones internas en diferentes niveles de gobierno para lo que será su hoja de ruta de cara al 2050.



Si bien el desarrollo de dichas estrategias es de por sí dificultoso, el verdadero desafío para América Latina estará en su implementación, especialmente considerando los planes actuales. Desde México hasta Argentina, los gobiernos siguen desarrollando nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas natural para las próximas décadas, tanto para uso doméstico como para la exportación, algo que será difícil de mantener en una economía de cero emisiones netas.

Según un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la inversión en producción de nuevos combustibles fósiles y en generación de energía a partir del carbón debe terminar este año para que el sector energético mundial alcance las emisiones netas cero en 2050. Un sector energético con emisiones netas cero es “viable”, pero requiere de acciones concretas urgentes por parte de todos los gobiernos (AIE, 2021)

Aunque la energía eólica y la solar están creciendo rápidamente, solo representan el 6,5% de la capacidad energética instalada actualmente en América Latina. Los combustibles fósiles siguen representando alrededor del 75% del suministro de energía primaria, y el resto de la matriz se compone en gran medida de hidroeléctrica, biomasa y bioenergía, de acuerdo con los datos de la AIE.

Los países de la región se pueden clasificar en dos grupos en función de su combinación de electricidad. Algunos dependen en gran medida de la energía hidroeléctrica, como Brasil y Colombia; otros, como Argentina, utilizan el petróleo y el gas como fuente principal de electricidad.

El carbón solo representa una pequeña parte de la producción total de electricidad, especialmente en Chile y Colombia.

Sin embargo, de cara al futuro, varios países como Argentina, Brasil y México mantienen planes ambiciosos para aumentar su producción de combustibles fósiles (en cambio, otros, como Guyana, quieren iniciar la explotación a una escala transformadora para sus economías). Ello haría que sus compromisos climáticos, tanto en la NDC como en la estrategia de largo plazo, fueran difíciles de cumplir.

Se estima que entre el 66% y el 81% de las reservas de petróleo de América Latina podrían no ser explotables si se cumplen los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Esto podría reducir los ingresos fiscales procedentes del petróleo a entre 1.300 y 2.600 millones de dólares, frente a los entre 2.700 y 6.800 millones de dólares si las reservas se explotaran en su totalidad (Solano-Rodríguez *et al.*, 2021).

Muchos países de América Latina dependen actualmente de la demanda mundial de petróleo para obtener ingresos fiscales. De hecho, casi la mitad del petróleo que se produce en la región se exporta a nivel mundial. No contar con al menos una parte de esos ingresos es una posibilidad que deberán empezar a planificar los países de la región, y es allí donde las estrategias de descarbonización se vuelven tan necesarias.

Para los gobiernos de América Latina es posible poner en marcha una recuperación verde tras la pandemia de la COVID-19 que también les permita impulsar la des-



carbonización de sus economías. Pero realizarlo requerirá grandes transformaciones de diversos sectores, abriendo nuevas oportunidades de empleos verdes en el marco de una transición justa en la región

La descarbonización de las economías de América Latina generará cerca de 15 millones de nuevos empleos para 2030 en sectores como la agricultura sostenible, la silvicultura, la energía solar y eólica, la manufactura y la construcción. El aumento del empleo se deberá mayormente a los cambios en las dietas y a la descarbonización del sistema energético (Saget *et al.*, 2020).

También se estima que América Latina puede ahorrar 621.000 millones de dólares anuales y evitar 1.100 millones de toneladas de CO₂ equivalente, si los sectores de la energía y el transporte alcanzan la neutralidad de emisiones en 2050. Estos ahorros incluyen 300.000 millones de dólares en gastos evitados en el transporte terrestre de pasajeros y reducciones de 222.000 millones en costos de electricidad (PNUMA, 2019).

La región puede lograr un futuro cercano libre de carbono mediante acciones inmediatas y paralelas en torno a cinco grandes pilares: i) eliminar gradualmente la generación de energía a partir de combustibles fósiles; ii) utilizar electricidad en lugar de combustibles fósiles para el transporte y la calefacción; iii) aumentar el transporte público; iv) detener la deforestación y sembrar árboles, y v) reducir los residuos en todos los sectores (Saget *et al.*, 2020).

La significativa disminución de los precios de tecnologías clave, como las energías renovables o los vehículos eléctricos, hacen que la implementación de dichos pilares sea factible, y de hecho más conveniente desde un punto de vista económico que las tecnologías actuales basadas en los combustibles fósiles. Además, un transporte público eficiente también podría mejorar la productividad, mientras que las dietas que dependen menos de la carne y los lácteos pueden ser más saludables.

Sin embargo, el desafío será lograrlo en el marco de una transición justa, es decir, realizando cambios con un enfoque participativo y lo más equitativo posible, para no dejar a nadie excluido. A pesar de haber registrado progresos en las últimas décadas, la región todavía se enfrenta a desigualdades sociales en asuntos de género y deficiencias en materia de competencias laborales, con un gran sector de trabajadores informales e insuficiente protección social.

La transición justa en América Latina requerirá que empresas y trabajadores cuenten con las competencias laborales necesarias para un futuro de cero emisiones y, a la vez, puedan disfrutar de condiciones de trabajo decente. Además, significará apoyar a las comunidades, trabajadores y empresas que se verán afectados de forma negativa por la reducción o el cierre de las industrias más contaminantes, como los combustibles fósiles.

El diálogo social y la búsqueda de consensos serán fundamentales para lograrlo, desde el intercambio de información entre el sector privado, los sindicatos y los go-



biernos, hasta la negociación de soluciones. Habrá que buscar fórmulas respetuosas con la crisis climática que, por un lado, se ajusten a las metas de reducción de emisiones y, por el otro, sean ampliamente aceptadas por todos los actores en el ámbito local. La educación y la información pública desempeñarán un papel central.

La COP26 será, por lo tanto, una oportunidad clave para que América Latina deje de lado sus divisiones y muestre una posición unificada ante la crisis climática. El desarrollo de metas ambiciosas de reducción de emisiones y políticas de adaptación a los eventos climáticos extremos, puede encaminar a la región a contar con economías con emisiones cero que, a su vez, generen más empleo y una recuperación económica pospandemia en el marco de una transición justa.



Conclusiones

- América Latina y el Caribe está en una posición particularmente asimétrica frente al cambio climático. Su contribución a las emisiones totales de gases de efecto invernadero es bastante limitada y, sin embargo, alberga zonas altamente vulnerables a los efectos del cambio climático.
- El Diálogo de Alto Nivel buscó promover los acuerdos para enfatizar la urgencia de la acción climática en América Latina de cara a la COP26, fomentar su ambición, impulsar el diseño de mecanismos innovadores de medios de implementación, además de incentivar la cooperación para la adaptación y resiliencia de la región.
- La región puede lograr un futuro cercano libre de carbono mediante acciones inmediatas y paralelas en torno a cinco grandes pilares: i) eliminar gradualmente la generación de energía a partir de combustibles fósiles; ii) utilizar electricidad en lugar de combustibles fósiles para el transporte y la calefacción; iii) aumentar el transporte público; iv) detener la deforestación y sembrar árboles, y v) reducir los residuos en todos los sectores.
- El desafío será lograrlo en el marco de una transición justa, es decir, realizando cambios con un enfoque participativo y lo más equitativo posible, para no dejar a nadie excluido. A pesar de haber registrado progresos en las últimas décadas, la región todavía se enfrenta a desigualdades sociales
- La COP26 será una oportunidad clave para que América Latina deje de lado sus divisiones y muestre una posición unificada ante la crisis climática. El desarrollo de metas ambiciosas de reducción de emisiones y políticas de adaptación a los eventos climáticos extremos, puede encaminar a la región a contar con economías con emisiones cero que, a su vez, generen más empleo.



Referencias bibliográficas

- AIE (2021): *Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector*, París.
- BÁRCENA, A., SAMANIEGO, J., PERES, W. y ALATORRE, J. (2020): *La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, CEPAL.
- CÁRDENAS, M., BONILLA, J. y BRUSA, F. (2021): *Políticas climáticas en América Latina y el Caribe: casos exitosos y desafíos en la lucha contra el cambio climático*, Washington, D.C., BID.
- CEPAL (2014): *La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile.
- CMNUCC (2021): “NDC Synthesis Report”, Glasgow (17 de septiembre).
- GROVES, D., SYME, J., MOLINA-PÉREZ, E., CALVO, C., VICTOR-GALLARDO, L., GODINEZ-ZAMORA, G., QUIROS-TORTOS, J., DE LEÓN, F., MEZA MURILLO, A., SAAVEDRA GÓMEZ, V. y VOGT-SCHILB, A. (2020): *Costos y beneficios de la descarbonización de la economía de Costa Rica*, Washington D.C., BID.
- OCDE (2021): *Climate finance provided and mobilized by developing countries*, París, OCDE.
- PNUMA (2019): *Carbono Cero. América Latina y el Caribe*, Panamá, Naciones Unidas.
- SAGET, C, VOGT-SCHILB, A. y LUU, T, (2020): *El empleo en un futuro de cero emisiones netas en América Latina y el Caribe*, Washington D.C., BID.
- SANAHUJA, J.A. (2021): “Pacto Verde Europeo. El giro ambiental de un actor global”, en MESA, M. (coord.): *El mundo después de la pandemia: enfrentar la desigualdad y proteger el planeta. Anuario CEIPAZ 2020-21*, Madrid, CEIPAZ, pp. 69-95.
- SOLANO-RODRÍGUEZ, B., PYE, S., PEI-HAO, L., EKINS, P., MANZANO, O. y VOGT-SCHILB, A. (2021): *Implications of climate targets on oil production and fiscal revenues in Latin America and the Caribbean*, Washington D.C., BID.
- TUDELA, F. (2014): *Negociaciones internacionales sobre cambio climático. Estado actual e implicancias para América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, CEPAL.
- WATSON, C. y SCHALATEK, L. (2020): “Reseña regional sobre el financiamiento para el clima: América Latina”, *Climate Funds Update*, Washington D.C., Overseas Development Institute/Heinrich Boll Stiftung.



Fundación Carolina, octubre 2021

Fundación Carolina
C/ Serrano Galvache, 26.
Torre Sur, 3ª planta
28071 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
@Red_Carolina

https://doi.org/10.33960/AC_26.2021

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)